



República de Colombia
**Tribunal Superior Del Distrito
Judicial De Valledupar**
Sala Segunda de Decisión Civil – Familia – Laboral

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL
RADICACIÓN: 200013105 001 2015 00239 01
DEMANDANTE: DIANYS MERCEDES BLANCHAR VILLAZON
DEMANDADO: ACCIONES ELECTRICAS DE LA COSTA S.A. Y
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Valledupar, primero (1º) de junio de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar el 20 de septiembre de 2018.

I. ANTECEDENTES

La accionante promovió demanda ordinaria laboral en contra de Acciones Eléctricas de la Costa S.A. y solidariamente a la Electrificadora del Caribe –Electricaribe- S.A E.S.P., para que, se declare que entre ella y la primera en mención existió un contrato de trabajo, del 1º de agosto de 2008 al 31 de agosto del 2011. En consecuencia, se condene solidariamente a pagarle el auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, las primas de servicios causadas durante todo el tiempo laborado, los salarios de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2011, la indemnización moratoria ordinaria por el no pago de salarios y prestaciones sociales, la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en un fondo de cesantías y las costas procesales.

En respaldo de sus pretensiones narró que fue vinculada a la empresa Acciones Eléctricas de la Costa S.A., a través de un contrato de trabajo, que rigió del 1º de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2011, cuando fue terminado de forma unilateral por la empleadora y sin que existiera justa causa.

Manifiesta que se desempeñó el cargo de gestora de cobro, bajo las directrices de José Gregorio Ariza Luqués, se le pagaba un salario mensual de \$980.000 y desarrollaba las actividades en el sector 3 Cesar,

el cual se encuentra conformado por los municipios de Chiriguaná, Curumaní, Pailitas, Pelaya, La Gloria, Tamalameque, Astrea, Banco y Guamal Magdalena. Las funciones consistían en la atención a usuarios del servicio público de energía eléctrica, temas relacionado con la facturación y doble facturación, atención de peticiones quejas y reclamos, recibos de pagos del servicio de energía eléctrica, campañas para recuperación de carteras vencidas por venta de energía a clientes morosos de Electricaribe S.A. ESP, campañas puerta a puerta a clientes de Electricaribe S.A. ESP para realizar acuerdos de pago de energía eléctrica dejada de cancelar.

Expone que la empresa Acciones Eléctricas de la Costa S.A. omitió su afiliación a un fondo de cesantías. Finalmente, exterioriza que las empresas Acciones Eléctricas de la Costa S.A. y Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., celebraron el contrato n.º CONT-CA-0022-08, para la operación de un centro de servicio de desarrollo, poda, mantenimiento de la red y medida, así como otros servicios, en el sector Cesar 3 de Eléctricaribe, con ocasión del cual el contratista se obligó a prestar los servicios de ingeniería por medio de un centro de servicios, desde donde se debía hacer la dirección, coordinación, y ejecución de obras de protección y remodelación de redes BT, mantenimiento correctivo MT/BT, mantenimiento correctivo en frio AT/MT/BT, mantenimiento preventivo y correctivo en At, lavado en frio y en caliente, poda y trocha en frio y en caliente, ordenes de servicio de PQR, campañas de perdida, SCR, censo de alumbrado público y TV cable, prestación de servicios de trabajo comunitario, gestiones de cobro, punto de atención, así como el pago o actualización de información en el área de gestión Cesar 03.

Al contestar **Acciones Eléctricas de la Costa S.A.**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó lo relacionado a la relación laboral tales como el salario, extremos temporales, cargo y funciones ejecutadas por la demandante. Negó deuda alguna, bajo el argumento que a la demandante le fueron pagadas las acreencias laborales al momento de dar por terminado el contrato de trabajo. En su defensa, propuso las excepciones de mérito de pago y buena fe.

Por su parte, la **Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A. E.S.P.**, contestó la demanda, al señalar que no le constaban los hechos y que se oponía a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en que dicho trabajador laboró fue a órdenes de Acciones Eléctricas de la Costa S.A.,

sociedad comercial con patrimonio, representación y objetos propios o diferentes a los de ella, por lo que no es la obligada a responder por lo pedido. En su defensa, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la solidaridad pretendida, inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido.

La demandada en solidaridad llamó en garantía a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., con base en la póliza suscrita.

Luego de admitido el llamamiento en garantía, Mapfre S.A, contestó la demanda y el llamamiento en garantía, al manifestar no constarle los hechos de la demanda. En cuanto al llamamiento aceptó lo relacionado con la póliza de cumplimiento N° 1001308000575, que tiene como objeto garantizar el pago de salarios, las prestaciones sociales e indemnizaciones en virtud del contrato N° CONT-CA-0022 celebrado con Electricaribe S.A. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda al señalar que Electricaribe no es responsable solidariamente de los rubros solicitados con la demanda. Para enervar las pretensiones de la demanda propuso la excepción de ausencia de cobertura del contrato de seguro por agotamiento del valor asegurado para el amparo de pago de salarios y prestaciones objeto de la póliza de cumplimiento N° 10013080000575.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2018, resolvió:

“PRIMERO: Declarar que entre DIANYS MERCEDES BLANCHAR VILAZON y ACCIONES ELECTRICAS DE LA COSTA SA, en su condición de trabajador y empleador respectivamente existió contrato de trabajo.

SEGUNDO: Condenar a ACCIONES ELECTRICAS DE LA COSTA SA, a pagar a DIANYS MERCEDES BLANCAHR VILLAZON, los siguientes conceptos:

- a). Salarios, de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2011, \$4.900.000.*
- b). auxilio de cesantía: por valor de \$3.021.666*
- c). Primas de servicios por valor de \$3.021.666*
- d). Intereses de las Cesantías, por valor de \$362.600*
- e). Vacaciones por un valor de \$1.510.833.*

TERCERO Condenar a ACCIONES ELECTRICAS DE LA COSTA SA A pagarle a DIANYS MERCEDES BLANCHAR VILLAZON, intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificada por la superintendencia financiera, desde la terminación del contrato de trabajo hasta cuando el pago se verifique sobre las sumas adeudadas a la trabajadora por concepto de salarios, prestaciones sociales reconocidas en esta sentencia y el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales.

CUARTO: Condenar a ACCIONES ELECTRICAS DE LA COSTA SA, a pagarle a DIANYS MERCEDES BLANCHAR VILLAZÓN, la sanción por falta de consignación de auxilio de cesantías en fondo de cesantías dentro del término legal por valor de \$18.130.000.

QUINTO: Absuélvase a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP, de la responsabilidad solidaria que reclama el trabajador, consecuentemente a Mapfre Seguros Generales de Colombia sa.

SEXTO: Declárese probada parcialmente la excepción de prescripción presentada por ELECTRICARIBE SA ESP y no probadas las excepciones de mérito propuestas por ACCIONES ELECTRICAS DE LA COSTA SA.

SEPTIMO: Condénese en costas a ACCIONES ELECTRICAS DE LA COSTA SA, tásense por secretaria”.

En sustento de su decisión, indicó el juzgado que el contrato de trabajo estaba demostrado por la confesión que hizo acciones eléctricas de la costa S.A., al contestar la demanda, así como sus extremos temporales (1° de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2011) y salario devengado (\$980.000), lo cual encuentra sustento probatorio con las documentales de folios 38 a 43.

En cuanto a la solidaridad, adujo que Electricaribe S.A. ESP, no está llamada a responder solidariamente por las condenas impuestas a ACCIONES Eléctricas de la Costa S.A., en tanto que no acreditó la actora cuales eran las funciones que ejercía como “Gestor de Cobro”, por lo que no se puede establecer que las mismas eran a fin al objeto social de Electricaribe S.A. ESP.

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso recurso de apelación con el que suplica la revocatoria de la sentencia en lo que se refiere a la absolución de Electricaribe S.A. ESP, al aducir que la misma debe ser condenada solidariamente por las condenas impuestas a la demandada principal, eso al ser la labor de gestor de cobro a fin con el objeto social de la demandada en solidaridad.

Para resolver lo pertinente, los Magistrados, previa deliberación, exponen las siguientes:

IV. CONSIDERACIONES

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación según lo previsto en el artículo 66A del Código de Procedimiento del Trabajo a efectos de determinar si Electricaribe S.A. ESP, debe responder o no solidariamente

por las condenas impuestas a la sociedad Acciones Eléctricas de la Costa S.A.

En el caso bajo estudio, no existe discusión frente a **i)** la existencia del contrato de trabajo entre la demandante y la demandada Acciones Eléctricas de la Costa S.A., así como tampoco frente a las características y extremos en su ejecución, en tanto, fueron aceptados por la empleadora en la contestación a la demanda; **ii)** tampoco se controvierte el negocio jurídico entre las demandadas Acciones Eléctricas de la Costa S.A. y Electricaribe S.A. E.S.P. y los linderos en que se efectuó.

i). De la Solidaridad.

Conforme a la jurisprudencia laboral, la H. Corte Suprema de Justicia, ha puntualizado que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo tiene como finalidad proteger al trabajador ante la eventualidad que un empresario pretenda realizar su actividad económica a través de contratistas independientes con el propósito de evadir su responsabilidad laboral. De allí, que, si ese empleador termina beneficiándose del trabajo desarrollado por las personas que prestaron sus servicios por intermedio de un contratista, debe responder de manera solidaria por los salarios y prestaciones sociales a que haya lugar.

No obstante, lo anterior, entre el contrato de obra y el de trabajo debe mediar una relación de causalidad que permita identificar si la obra o labor realizada por el trabajador hace parte de las actividades normales de quien encargó su ejecución. Para analizar ese nexo de causalidad no debe observarse exclusivamente y de manera estricta el objeto social del contratista, sino que la obra ejecutada no constituya una labor extraña a las actividades del beneficiario.

Las anteriores reglas, la encontramos a partir de la sentencia de 10 de septiembre de 1997, radicado n.º 9881, en la que explicó que: *“Con todo interesa aclarar que la solidaridad en cuestión se excluye cuando el contratista cumple actividades ajenas de las que explota el dueño de la obra, porque lo que persigue la ley con el mecanismo de solidaridad es proteger a los trabajadores frente a la posibilidad de que el empresario quiera desarrollar su explotación económica por conducto de contratistas con el propósito fraudulento de evadir su responsabilidad laboral”*.

Frente al modo en que debe ser interpretado el nexo de causalidad, fue abordado con mayor profundidad en la sentencia de 2 de junio de 2009, radicado n.º 33082, al detallar que:

“Con todo, encuentra la Corte, como lo ha explicado en anteriores oportunidades, que de cara al establecimiento de la mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que, si bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado”. (Resaltado fuera del texto).

Bajo esa misma línea de argumentación, sobre la relación o nexo causal existente entre las actividades del contratista independiente y las del beneficiario de la obra, la H. Corte Suprema aclaró en sentencia del 1º de marzo de 2010, radicado 35864, que no se deben comparar exclusivamente los objetos sociales del contratista independiente y del beneficiario o dueño de la obra. Al respecto, concluyó que *“lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de este. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que si bajo la subordinación del contratista independiente adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado”.*

Los anteriores pronunciamientos fueron reiterados en la sentencia de 6 de marzo de 2013, radicado n.º 39050 y SL7789 de 2016, oportunidad en la que la señaló que para que se configure la solidaridad, además que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, se requiere que ella constituya una función normalmente realizada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico. Asimismo, recordó que para su determinación se podía tener en cuenta la actividad específica ejecutada por el trabajador y no solo el objeto social del contratista y el beneficiario de la obra.

Finalmente, en la sentencia SL7459-2017, reiterada en SL 2067-2021 indicó que la interpretación del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo pasa por considerar que la responsabilidad solidaria del beneficiario o dueño de la obra existe a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, caso en el que tal obligación deja de operar y debe responder por salarios, prestaciones, e indemnizaciones del contratista, *“lo que de contera, comporta que la carga de probar la excepción gravita sobre quien la alega. Así debe ser, además, porque esa exclusión de responsabilidad, basada en el carácter del beneficiario o dueño de la obra, conllevaría una discriminación negativa desfavorable al trabajador, sujeto contractual al que le resulta indiferente ese aspecto, toda vez que, en cualquier caso, el espíritu de la norma es propugnar por una mayor protección”*.

ii). Del Caso Concreto.

Con la prueba documental visible a folio 89 del expediente, se verifica en el contrato CONT-CA-0022-08, suscrito entre la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. y Acciones Eléctricas de la Costa, que el contratista se obliga a:

“(...)a prestar los servicios de ingeniería por medio de un centro de servicios, desde donde se hará la dirección, coordinación y ejecución de obras de protección y remodelación de redes BT, mantenimiento correctivo MT/BT, mantenimiento preventivo en frío AT/MT/BT, mantenimiento preventivo y correctivo en AT, lavado en frío y en caliente, poda y trocha en frío y en caliente, ordenes de servicio de PQR, campañas de perdidas, SCR, censo de alumbrado público y TV cable, prestación de servicios de trabajo comunitario, gestión de cobro, puntos de atención y pago y actualización de información en el área de gestión Cesar 03, en las condiciones descritas en el alcance del servicio y demás anexos del presente contrato. El contratista deberá utilizar bajo su directa dependencia laboral y responsabilidad, toda la mano de obra necesaria y proporcionar todas las herramientas y equipos, transporte, servicios e instalaciones necesarios, salvo los exceptuados expresamente en los anexos de este contrato. Se incluyen todas las actividades indispensables, inherentes y accesorias a dicho objeto, todo lo cual se denominará, en adelante los servicios”

Del mismo modo, se advierte con los instrumentos vertidos a folios 38 a 42 del expediente, el contrato individual de trabajo, suscrito por la duración de una obra o labor determinada, entre Acciones Eléctricas de la Costa S.A y Dianys Mercedes Blanchar Villazón, para desempeñar el cargo de Gestora de cobro. Allí, se corrobora que la obra contratada es *“Realizar la operación de un centro de servicio de desarrollo, poda, mantenimiento de la red y la medida, gestión de cobro, atención al cliente y otros servicios en el sector Cesar 03, otras funciones afines relacionadas*

con el contrato N° CONT-CA-022-08 suscrito entre ACCIONES ELECTRICAS DE LA COSTA SA y ELECTRICARIBE SA ESP.

También se expresa que la trabajadora se obliga: *“a) a poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las ordenes e instrucciones que le imparta el empleador directamente o a través de sus representantes...”*.

A folio 43 aparece una certificación, en la cual Acciones Eléctricas de la Costa S.A., hace constar que la demandante laboró en esa empresa en su condición de *“GESTORA DE COBRO”*, a partir de 1° de febrero de 2008 al 31 de agosto de 2011 y que tales labores fueron en cumplimiento del contrato *“N° CONT-CA-0022-08, suscrito entre ACCIONES ELECTRICAS DE LA COSTA SA y ELECTRICARIBE SA ESP”*.

En paralelo, existe certificado de existencia y representación o de inscripción de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. - *“Electricaribe S.A. E.S.P”*, (f.° 21 a 37) en el cual se indica que *“el objeto principal de la sociedad consiste en la prestación de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la realización de actividades, obras, servicios y productos relacionados. (...) La sociedad podrá igualmente aprovechar su infraestructura y recursos disponibles para la prestación de otros servicios y venta de otros productos no directamente relacionados con el servicio eléctrico. (...)”* .

Finalmente, aparece el certificado de existencia y representación de Acciones Eléctricas de la Costa S.A., (f.° 17 a 20) el cual describe como objeto social de la misma el desarrollo de las siguientes actividades: *“1. La ejecución de actos comerciales y de prestación de servicios en Colombia y en el exterior de: Ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, ingeniería civil, mecánica, ingeniería naval, seguridad industrial, seguridad en el campo de la salud y de arquitectura. Consultoría, interventoría y mantenimiento, gerencia, elaboración, construcción y desarrollo de proyectos urbanos, comercialización de energía. Representación de generadores, comercializadores y operadores de redes de transmisión y distribución. Inspectorías a toda instalación”*.

Al amparo de todas las pruebas recaudadas en el plenario, especialmente las antes referidas, se concluye en punto a lo relacionado

con el objeto social de ambas empresas, que sus actividades abarcan todo lo relacionado con el campo de la electricidad, de manera que mal se puede considerar que la desarrolladas por la contratista sea ajena o extraña a las actividades normales de la empresa beneficiada con la ejecución de la obra o dueña de esa obra.

Aunado a ello, se constata que el la accionante desarrolló una actividad directamente vinculada con la ordinaria explotación del objeto económico de Electricaribe S.A. ESP, al ser la labor de Gestora de Cobro, un elemento necesario para el cabal funcionamiento de la comercialización de energía eléctrica. En tal virtud, no es posible considerar que esa labor sea ajena o extraña a las actividades normales de la empresa beneficiaria de esa obra.

En este punto vale precisar que contrario a la manifestado por el *a quo*, en el plenario si están acreditadas las funciones que desempeñaba Dianys Mercedes Blanchar, en su condición de gestora de cobro, dado que en el hecho 5 de la demanda, la actora dijo:

“5. las funciones desempeñadas en cumplimiento de sus funciones laborales con la empresa ACCIONES ELECTRICAS DE LA CPOSTA SA, era la de GESTOR DE COBRO, que se materializaban en:

- a. Atención a usuarios del servicio público de energía eléctrica*
- b. Temas relacionados con la facturación y doble facturación*
- c. Atención de peticiones quejas y reclamos*
- d. Recibos de pagos del servicio de energía eléctrica*
- e. Campañas para recuperación de carteras vencidas por venta de energía a clientes morosos de Electricaribe sa esp.*
- f. Campañas puerta a puerta a clientes de Electricaribe da esp para realizar acuerdos de pago de energía eléctrica dejada de cancelar”.*

Situación fáctica que fue aceptada por la empleadora demandada al contestar la demanda a folio 82.

Bajo ese panorama, para la Sala queda claro que Electricaribe S.A. E.S.P, tiene como objeto misional la prestación de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica, y la actividad ejecutada por la actora para la empresa contratista, fue la de gestora de cobro, actividad a fin al objeto social de Electricaribe SA ESP, dado que aquella era la encargada de atender a los usuarios a los de Electricaribe SA ESP, en temas de facturación, peticiones quejas y reclamos presentadas por esos usuarios, quienes recibían el servicio de energía eléctrica, en el sector Cesar 03.

Así las cosas, no queda duda que las actividades desplegadas por la demandante las desarrolló con ocasión del contrato de obra suscrito por las demandadas, por lo que necesariamente conlleva a revocar en este punto la decisión adoptada por la juez de primer grado, para en su lugar, condenar a Electricaribe S.A. ESP a responder solidariamente por las condenas impuestas a la demandada principal.

iii). Del llamamiento en garantía.

La figura del llamamiento en garantía está contemplada en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que *“quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.”*

A folio 652 del expediente aparece copia de la póliza 100130800575, tomada por Acciones Eléctricas de la Costa S.A., la cual tiene como afianzado y beneficiario a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., con el fin de garantizar el pago de salarios, las prestaciones sociales e indemnizaciones, el buen manejo de materiales y la calidad y buen funcionamiento del contrato CONT-CA-0022-08. La vigencia de ésta póliza inició el 1° de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2014, con una suma asegurada por salarios y prestaciones sociales de \$114.379.271.

En tal virtud, no queda duda que la póliza fue suscrita para garantizar el pago de los salarios, las prestaciones sociales e indemnizaciones a cargo de Acciones Eléctricas de la Costa S.A. y a favor de los trabajadores por ella contratada para desarrollar la obra de propiedad de Electricaribe S.A. E.S.P, por lo que en principio Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., sería condenada a responder por las condenas impuestas a la llamante Electricaribe S.A. ESP, sin embargo, se declarará probada la excepción de *“Ausencia de cobertura del contrato de seguro por agotamiento del valor asegurado para el amparo de pago de salario y prestaciones objeto de la póliza de cumplimiento N° 10013080000575”*, al evidenciarse a folios 661 a 676 que en los procesos judiciales con radicado 2013-00546 y 2013-00208, conocidos por los Juzgados Tercero Laboral del Circuito de Valledupar y Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, respectivamente, se efectuaron depósitos judiciales¹ y las respectivas

¹ Obra a folio 667, depósito judicial por \$74.817.187y a folio 669 pago por valor de \$39.562.084

decisiones de los despachos que declararon la terminación de esos proceso por el pago realizado por la aseguradora, con ocasión de afectación de la póliza en comento, por un valor total de \$114.379.271.

iv) Excepciones.

Al haberse demostrado la responsabilidad de Electricaribe S.A. ESP, se declaran no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la solidaridad pretendida, inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR – SALA N°2 CIVIL-FAMILIA-LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

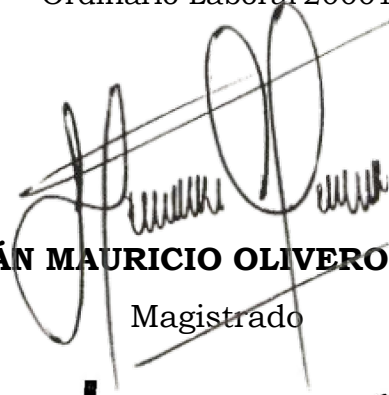
PRIMERO: REVOCAR el numeral Quinto de la sentencia proferida por el Juzgado Primero laboral del Circuito de Valledupar el 20 de septiembre de 2018, para en su lugar, declarar a la Electrificadora del Caribe S.A. ESP solidariamente responsable por las condenas impuestas en contra de Acciones Eléctricas de la Costa S.A.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de Ausencia de cobertura del contrato de seguro por agotamiento del valor asegurado para el amparo de pago de salario y prestaciones objeto de la póliza de cumplimiento N° 10013080000575, propuesta por la llamada en garantía Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.

TERCERO: Sin costas en esta instancia ante su no causación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Intervinieron los Magistrados,



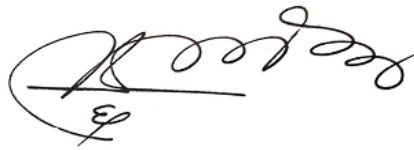
HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA

Magistrado



JHON RUSBER NOREÑA BETANCOURT

Magistrado



JESÚS ARMANDO ZAMORA SUÁREZ

Magistrado